



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FORMA A-5

SESIÓN PÚBLICA NÚM. 54 ORDINARIA

MARTES 13 DE JUNIO DE 2017

En la Ciudad de México, siendo las once horas con cincuenta y un minutos del martes trece de junio de dos mil diecisiete, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I. y Javier Laynez Potisek.

El señor Ministro Alberto Pérez Dayán no asistió a la sesión por desempeñar una comisión oficial.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTA

Se sometió a consideración el proyecto de acta de la sesión pública número cincuenta y tres ordinaria, celebrada el lunes doce de junio del año en curso.

Por unanimidad de diez votos, el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS



Sesión Pública Núm. 54

Martes 13 de junio de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del martes trece de junio de dos mil diecisiete:

I. 70/2016

Acción de inconstitucionalidad 70/2016, promovida por diversos diputados integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, demandando la invalidez de los artículos 29, 34, párrafo tercero, y 48, párrafo primero, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como del artículo transitorio tercero, párrafo sexto, del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis. En el proyecto formulado por el señor Ministro José Ramón Cossío Díaz se propuso: *“PRIMERO.- Es procedente pero infundada la acción de inconstitucionalidad 70/2016, promovida por diversos diputados integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. SEGUNDO.- Se reconoce la validez de los artículos 29, 34, párrafo tercero; 48, párrafo primero, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como del artículo TERCERO transitorio, párrafo sexto, del decreto por el que se expidió la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado en la edición vespertina del*



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Diario Oficial de la Federación de dieciocho de julio de dos mil dieciséis”.

El señor Ministro Presidente reabrió la discusión en torno al apartado VI, relativo a las consideraciones y fundamentos.

El señor Ministro Medina Mora I. opinó que la declaración patrimonial no es información pública por definición, sino un instrumento de medición y seguimiento de la evolución patrimonial de los funcionarios públicos, con una funcionalidad específica, por lo que se encuentra sujeta a todas las reservas que son aplicables a los datos personales y la vida privada. Aclaró que no resulta aplicable el artículo 6°, apartado A, fracción I, constitucional ni el principio de máxima publicidad, puesto que no se trata de una información *per se* de naturaleza pública, sino que se hace pública, lo cual es distinto.

Apuntó que el artículo 108 constitucional obliga a la presentación de declaraciones patrimoniales, las cuales, en todo momento, deben respetar las condiciones mínimas de protección de la información personal de los servidores públicos. A su vez, los artículos 6°, apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, constitucionales, refieren a una expectativa amplia de privacidad en la información que refiere a la vida privada y datos personales de todos los individuos, mientras que los artículos 103 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

definen materialmente la información reservada y confidencial.

Precisó que la posibilidad de difundir la información de los servidores públicos no radica en la atribución que ha sido conferida al Comité para emitir formatos, sino en los baremos materiales consignados expresamente en la Constitución y en la ley, por lo que la expedición de los formatos no puede ser arbitraria, sino que es una atribución para la ejecución de la ley, sin que esto lo faculte, en momento alguno, para redefinir el tipo de información que debe ser entregada. Puntualizó que la facultad del Comité de Participación Ciudadana de elaborar los formatos y ponerlos a consideración del Comité Coordinador no significa que no se deban atender las limitaciones constitucionales y legales que, por razón de privacidad, restringen el tipo de información pública.

Valoró que la racionalidad de un sistema de combate a la corrupción no implica el conocimiento de datos íntimos del servidor público, sino la posibilidad de contrastar objetivamente su evolución patrimonial, en relación con los cargos públicos que ocupa. Adelantó que lo anterior no evita que, en su momento, la información solicitada en los formatos y que no respete los límites constitucionales de la privacidad, pueda impugnarse en el caso concreto de su aplicación.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Por tanto, se manifestó en favor de la validez de las normas impugnadas porque la facultad del Comité no viola el principio de reserva de ley.

La señora Ministra Piña Hernández estimó que, en cuanto al principio de reserva de ley, la constitucionalidad del artículo 29 impugnado se debe analizar sistemática y armónicamente entre los principios y reglas que establece el artículo 6°, apartado A, fracciones I y II, constitucional.

En cuanto a la facultad del Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, de establecer las normas, mecanismos y emitir los formatos correspondientes, recalcó que el artículo 108 constitucional estipula que “Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley”, y que el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que “Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes”. Asimismo, apuntó que el artículo 113, fracción III, inciso b), constitucional contempla



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

que “Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la Ley: [...] b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan”, y que es correlativo del diverso 9, fracción VII, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual indica que “El Comité Coordinador tendrá las siguientes facultades: [...] VII. La determinación e instrumentación de los mecanismos, bases y principios para la coordinación con las autoridades de fiscalización, control y de prevención y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan”.

Por su parte, resaltó que el Comité de Participación Ciudadana tiene por objetivo coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, por lo que cuenta con una facultad para diseñar, determinar, instrumentar y sistematizar toda la información que sobre la materia de anticorrupción generen las instituciones competentes de los órganos de gobierno, y también para diseñar aquellas políticas públicas encaminadas a evitar y prevenir la corrupción, así como faltas administrativas de los servidores públicos, por lo que el artículo impugnado no vulnera el principio de reserva de ley, pues permite un equilibrio entre la garantía en favor de los gobernados y el límite natural de las facultades del legislador en cuanto a la protección de la vida privada y los datos personales, lo cual adicionalmente



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

resulta acorte con los principios establecidos en la Constitución.

Abundó que lo anterior significa que el legislador definió el qué, mientras que en el ámbito administrativo se definirá el cómo, por lo que no se están otorgando facultades normativas en favor del Comité Coordinador para definir los alcances de los derechos humanos a la información y vida privada, sino una competencia específicamente operativa, consistente en la creación de los formatos bajo los cuales se deberán presentar las declaraciones, lo que, si bien impacta en el ejercicio de esos derechos, sólo constituyen instrumentos acordes con los principios constitucionales.

Subrayó que la participación del Comité Coordinador en la elaboración de los formatos persigue un fin más allá de la simple lógica de una delegación administrativa, esto es, hacer efectiva la participación ciudadana para la consolidación de un sistema democrático fundamentado en el principio de rendición de cuentas. Reconoció que el ejercicio de esa facultad, como cualquier otro acto de autoridad, puede ser objeto de revisión constitucional.

Adelantó que, de no reconocérsele estas facultades de establecer la normatividad y diseño de los formatos respectivos, se estaría transgrediendo o tergiversando el objetivo de su creación, al convertirlos en meros entes observadores y no partícipes del Sistema Nacional Anticorrupción. En este sentido, anunció su voto por la validez de los preceptos impugnados.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales compartió el reconocimiento de validez del artículo 29 impugnado, al considerar que no viola el principio de máxima publicidad en la porción normativa: “Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución” pues, por un lado, la restricción que establece es acorde con el artículo 6° constitucional y, por otro lado, dicha restricción no merma o quita eficacia a la finalidad de la reforma constitucional en materia de anticorrupción: establecer los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas de los servidores públicos para evitar la corrupción y, por esa razón, hacer pública más información de un servidor público que la que corresponda a un particular.

Consideró que, si bien la calidad de servidor público lo ubica en un plano probablemente distinto al de un particular, a propósito de su función, obligaciones y facultades bien especificadas, no implica que ciertos datos estrictamente privados, como persona humana, deban considerarse públicos dada esa sola calidad, por lo que no hay disposición constitucional ni convencional alguna para sostener esa condición, máxime que no coincide con el objeto de la reforma constitucional en materia de anticorrupción, es decir, la publicación de esos datos personales no es relevante para determinar si los servidores públicos incidieron o no en actos de corrupción, además de que pondrían en riesgo su



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

derecho a la vida privada, a la inviolabilidad de su domicilio, a la vida e integridad personal, aunado a que esa vulneración se haría extensiva a terceros, por ejemplo, sus familiares.

Anunció voto en contra del reconocimiento de validez del artículo 29 impugnado, en la porción normativa: “Para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes”, al estimar que viola el principio de reserva de ley, en tanto que el artículo 108 constitucional prevé que “Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley”, con lo que concluyó que debe ser el legislador federal y no otro órgano, cualquiera que sea su naturaleza, el competente para establecer los parámetros sobre los cuales se emitirán los parámetros específicos que den certeza a la forma y contenido que tendrán los formatos de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos, no necesariamente los formatos en sí, y así encontrar el equilibrio entre los derechos de acceso a la información y vida privada.

Reconoció que los artículos 6° constitucional, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Información Pública determinan cuál información será considerada confidencial y cuál reservada, por lo que pudieran considerarse como parámetros generales; sin embargo, no son suficientes para cumplir con el mandato establecido en el 108 constitucional, conforme al cual los parámetros, lineamientos o elementos para la realización de los formatos de las declaraciones de intereses o patrimoniales de los servidores públicos deben estar establecidos específicamente por el legislador federal, por lo que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción no tiene competencia para determinarlos, atendiendo a las facultades delimitadas en el artículo 113, fracción III, constitucional: “III. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la Ley: a) El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales; b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan; c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno; d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos; e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas”.

El señor Ministro ponente Cossío Díaz recapituló los argumentos vertidos durante la discusión del asunto y les dio respuesta: 1) en cuanto a que no se dio respuesta en el proyecto a los temas de reserva de ley y tipos administrativos sancionadores en blanco; apuntó que en su página diez se precisó que estos problemas están subsumidos al de las facultades que tiene el Comité de Participación Ciudadana y el Comité Coordinador, por lo que se responde puntual e integralmente a esos temas en los párrafos cincuenta y ocho, cincuenta y nueve y sesenta y cuatro, en el sentido de que el principio de reserva de ley no es una mera exigencia formal, sino que implica la existencia de una referencia material constitucional y suficiente para la elaboración de los formatos y de otro tipo de disposiciones administrativas, 2) por lo que respecta a la competencia de los Comités; señaló que no tienen que enumerarse en ley todos los elementos del Sistema Nacional Anticorrupción, sino que es factible que algunos de ellos se desarrollen por el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Participación Ciudadana, puesto que debe diferenciarse entre normas jurídicas y formatos mediante los cuales se ejercen esas normas jurídicas, además de que existen precedentes de esta Suprema Corte en los que, por ejemplo, se tiene por satisfecho el principio de legalidad en materia tributaria aun cuando algunos elementos esenciales no necesariamente están en el Código Fiscal de la Federación o en las leyes correspondientes, máxime que el Comité Coordinador no decide cuál información es pública y cuál reservada, sino que, de acuerdo con los preceptos 6° constitucional, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debe garantizar que se resguarden los rubros de información reservada en los formularios que emita, 3) en relación con el precedente del amparo en revisión 599/2012; recordó que no se obtuvo una votación idónea para considerarlo como vinculante para esta acción de inconstitucionalidad, además de que sobrevino una reforma constitucional significativa a los artículos 6°, 22, 28, 73, 74, 76 y 79, entre otros, por lo que los preceptos tienen que leerse de forma diversa, una vez establecido el Sistema Nacional Anticorrupción, y 4) en lo atinente a la respuesta de la antinomia entre los artículos 29 impugnado y 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; anotó que, si bien no se esgrimió un concepto de invalidez específico para este análisis, resultaría incompleto el razonamiento interpretativo de no incluirse este estudio.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Modificó el proyecto para eliminar los ejemplos dados en los párrafos cincuenta y dos y cincuenta y siete del proyecto. En lo restante, sostuvo la propuesta.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea consultó al señor Ministro ponente si se quitarían otros ejemplos y si se dejaría el estudio de la atribución de los Comités.

El señor Ministro ponente Cossío Díaz respondió en sentido afirmativo a ambas cuestiones.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del apartado VI, relativo a las consideraciones y fundamentos, consistente en reconocer la validez de los artículos 29, 34, párrafo tercero, y 48, párrafo primero, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como del artículo transitorio tercero, párrafo sexto, del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis, la cual se aprobó por mayoría de seis votos de los señores Ministros Cossío Díaz, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea por razones distintas, Piña Hernández, Medina Mora I. con el proyecto original y Laynez Potisek. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, Pardo Rebolledo y Presidente Aguilar Morales votaron en contra. El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea anunció voto concurrente. Los señores



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Ministros Franco González Salas, Piña Hernández y Medina Mora I. reservaron su derecho de formular sendos votos concurrentes. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena y Luna Ramos anunciaron sendos votos particulares.

Por instrucciones del señor Ministro Presidente Aguilar Morales, el secretario general de acuerdos leyó los puntos resolutivos que regirán el presente asunto, en los siguientes términos:

“PRIMERO. Es procedente pero infundada la acción de inconstitucionalidad 70/2016, promovida por diversos diputados integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. SEGUNDO. Se reconoce la validez de los artículos 29, 34, párrafo tercero, y 48, párrafo primero, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como del artículo transitorio tercero, párrafo sexto, del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis. TERCERO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta.”

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la congruencia formal de los puntos resolutivos, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el siguiente asunto de la lista:

II. 198/2016

Incidente de inejecución de sentencia 198/2016, respecto de la dictada el catorce de julio de dos mil catorce por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, en auxilio del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, en el juicio de amparo 789/2014, promovido por [REDACTED] y otros. En el proyecto formulado por el señor Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se propuso: *“PRIMERO. Es fundado el incidente de inejecución de sentencia, por lo que respecta a los funcionarios del Municipio de Nacajuca, Tabasco, en funciones en el periodo dos mil trece al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. SEGUNDO. Consígnese a [REDACTED] quien ocupó el cargo de Presidente Municipal de Nacajuca, Tabasco; [REDACTED] [REDACTED] quien ocupó el cargo de Síndico de Hacienda del Municipio de Nacajuca, Tabasco; [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Y.,*



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NA

[REDACTED] y [REDACTED], quienes ocuparon el cargo de Regidores del Municipio de Nacajuca, Tabasco, ante el Juez de Distrito en el Estado de Tabasco, en turno, por haber incumplido la sentencia constitucional de catorce de julio de dos mil catorce, dictada en el juicio de amparo 789/2014, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, de acuerdo con lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a fin de ser juzgados y sancionados por la desobediencia cometida, en los términos previstos por el artículo 267 de la Ley de Amparo vigente. TERCERO. Es infundado incidente de inejecución de sentencia, por lo que respecta a los funcionarios del Municipio de Nacajuca, Tabasco, en funciones en el periodo del uno de enero de dos mil dieciséis al cuatro de octubre de dos mil dieciocho, al considerarse excusable el incumplimiento a la sentencia de amparo, por lo que por el momento no se está en el caso de aplicar las sanciones que prevé la fracción XVI del artículo 107 constitucional. CUARTO. Devuélvanse los autos de este expediente al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco para los efectos precisados en el apartado décimo cuarto de esta ejecutoria. QUINTO. Se deja sin efectos el dictamen de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis emitido por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, en el incidente de inejecución de sentencia 7/2016 de su índice”.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Asimismo, el secretario general de acuerdos informó que, en cumplimiento al punto tercero, párrafo segundo, del Acuerdo General 10/2013 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, se solicitó informe al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco sobre la recepción de documentación relevante presentada por las autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector, o el dictado de algún proveído que se tenga por cumplida la sentencia emitida en el juicio respectivo; en respuesta, dicho órgano jurisdiccional emitió —vía electrónica— copia del oficio 14365/2017 de nueve de junio de dos mil diecisiete, en el que se transcribe el acuerdo de la misma fecha, que ordenó dar a conocer a este Alto Tribunal que, en los proveídos de dos y cinco de junio de esta anualidad, se ordenó dar vista a las partes con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, respecto de algunos quejosos, toda vez que el Ayuntamiento de Nacajuca exhibió diversos títulos de crédito a su favor, además de que la segunda regidora y síndico de hacienda, mediante oficio, informaron que se solicitó la autorización de un empréstito por la cantidad de veintidós millones, ciento ochenta y siete mil, setecientos ocho pesos, para solventar el pago de la ejecutoria, sin que con posterioridad se hubiera presentado documentación alguna por las autoridades responsables relevante para el cumplimiento de la ejecutoria.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta de los apartados I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X relativos, respectivamente, a los antecedentes del asunto, al trámite del juicio de amparo y gestiones para su



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

cumplimiento, al trámite del primer incidente de inejecución de sentencia, a la devolución del incidente de inejecución de sentencia y gestiones efectuadas para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, al trámite del segundo incidente de inejecución de sentencia, a la devolución del incidente de inejecución de sentencia y gestiones efectuadas para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, al trámite del tercer incidente de inejecución de sentencia, al trámite del cuarto incidente de inejecución de sentencia, al trámite ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la competencia, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro ponente Gutiérrez Ortiz Mena presentó los apartados XI, XII, XIII y XIV relativos, respectivamente, al estudio, a la decisión, a las sanciones a imponerse y a los actos que se deben efectuar para el cumplimiento a la sentencia de amparo. Precisó que, al iniciarse la elaboración del proyecto, subsistía el incumplimiento de la sentencia de amparo de veintiséis quejosos, a los cuales se les adeudaba, al catorce de noviembre de dos mil trece, once millones, novecientos treinta y siete mil, doscientos ochenta y ocho pesos con cuarenta y cuatro centavos, de conformidad con la actualización del Tribunal de Conciliación al dos de septiembre de dos mil dieciséis, el cual actuó con los medios



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

que tuvo a su alcance para el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al igual que el Congreso del Estado de Tabasco. Por otra parte, el Ayuntamiento de Nacajuca, en el período de dos mil trece a dos mil quince, solicitó al Gobernador y al Congreso del Estado de Tabasco ampliar su presupuesto para efectuar el pago respectivo; celebraron convenio con uno de los quejosos y prometieron efectuar actos para el cumplimiento, sin que se advierta de constancias que del catorce de agosto de dos mil catorce —cuando causó ejecutoria la sentencia de amparo— hasta diciembre de dos mil seis, hubieran acatado la sentencia respectiva.

Por lo anterior, el proyecto propone, ante el desacato del Presidente, Síndico de Hacienda y Regidores del Municipio de Nacajuca, en funciones en el período de dos mil trece al dos mil quince, aplicar las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, constitucional, consistente en la consignación ante el juez de distrito correspondiente. En cuanto a los diversos funcionarios en el período de dos mil dieciséis a dos mil dieciocho, indicó que han celebrado —en los últimos meses— diversos convenios con la mayoría de los quejosos, restando solamente el pago a nueve de ellos, han efectuado adecuaciones a sus partidas presupuestales y celebraron sesión de cabildo en la que se aprobó solicitar al Congreso del Estado la autorización de un empréstito para tales efectos, por lo que su conducta es excusable y, por tanto y por el momento, no se está en el caso de aplicar las sanciones que prevé dicha fracción XVI, por lo que debe dejarse sin efectos el dictamen de veintinueve de septiembre



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

de dos mil dieciséis, emitido por el tribunal colegiado en el incidente de inejecución de sentencia 7/2016, sin que lo anterior se traduzca en que la sentencia de amparo quede sin cumplimentarse, por lo que deberá darse seguimiento a los actos que deberán realizar las diversas autoridades que participen en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo.

La señora Ministra Luna Ramos se manifestó en contra del proyecto.

Narró los antecedentes del asunto: 1) se emitió un laudo por el despido de diversos trabajadores de un ayuntamiento, 2) se pagó a veintiséis de ellos y se ha tratado de dar cumplimiento a los demás, 3) el proyecto propone no consignar a las autoridades municipales que en este momento se encuentran en funciones, sino a la anterior administración.

Apuntó que, como ha reiterado en otros asuntos, la consignación de una autoridad implica el no cumplimiento de una sentencia de amparo; sin embargo, en el caso hubo cumplimiento parcial, puesto que en el período de dos mil trece a dos mil quince no se destituyeron a los trabajadores, sino desde dos mil ocho, pero a la primera administración mencionada le correspondió el pago, según el propio proyecto, porque la determinación conducente quedó firme el veintiséis de mayo de dos mil catorce, es decir, cuando estaba muy avanzada esa administración; no obstante, hicieron algunas gestiones ante el Congreso del Estado, incluso a través de un crédito, aunque no les fue concedido.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Por tanto, consideró que trataron de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

Por estas razones, se apartó de los puntos resolutivos primero y segundo, y se expresó en favor del diverso punto resolutivo tercero, que declara infundado el incidente de inejecución de sentencia por lo que respecta a los funcionarios del municipio que se encuentran actualmente en funciones, así como en favor del cuarto y quinto.

El señor Ministro Franco González Salas coincidió con la señora Ministra Luna Ramos, resaltando que el presupuesto del municipio era de veintitrés millones de pesos, y las reclamaciones ascendían a cerca de cuarenta millones, y hay constancia de la solicitud de un crédito al Congreso del Estado para poder hacer frente a las obligaciones, y que no se otorgó y, dado que los tiempos de las administraciones está predeterminado, no les fue posible obtener los recursos para el cumplimiento de la sentencia, y fue el siguiente ayuntamiento el que pudo recibir esos recursos. Por dichas razones, también se manifestó en contra de los puntos resolutivos primero y segundo del proyecto.

La señora Ministra Piña Hernández compartió las consideraciones de los señores Ministros Luna Ramos y Franco González Salas, por lo que votará en contra del proyecto.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Laynez Potisek concordó en que, por la narrativa de los hechos, no hubo incumplimiento, adhiriéndose a las argumentaciones de los señores Ministros Luna Ramos y Franco González Salas.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea reconoció que estaba en favor del proyecto, pero que se convenció de las argumentaciones de los señores Ministros Luna Ramos y Franco González Salas, por lo que votará en contra de sus resolutivos primero y segundo.

El señor Ministro ponente Gutiérrez Ortiz Mena sostuvo el proyecto porque se trata de valoraciones de hechos conforme a los criterios de cada uno de los señores Ministros y, en su caso, estimó que la contumacia se dio de dos mil trece a dos mil dieciséis, no de dos mil dieciséis a dos mil dieciocho. Recalcó que hubo indicios de cumplimiento cuando el asunto llegó a esta Suprema Corte, no antes, con lo que se configura la contumacia y rebeldía en el cumplimiento de la sentencia.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales se pronunció en favor del proyecto porque el ayuntamiento pudo adoptar diversas medidas más eficaces para cumplir, en el lapso de año y cinco meses, le ejecutoria de amparo, por ejemplo, solicitar financiamiento que no requería autorización del Congreso del Estado, mas no hizo absolutamente nada.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta de los apartados XI, XII, XIII y XIV relativos, respectivamente, al estudio, a la decisión, a las sanciones a imponerse y a los actos que se deben efectuar para el cumplimiento a la sentencia de amparo, de la cual se obtuvieron los siguientes resultados:

Se suscitó un empate de cinco votos a favor de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Pardo Rebolledo, Medina Mora I. y Presidente Aguilar Morales, y cinco votos en contra de los señores Ministros Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Piña Hernández y Laynez Potisek, respecto de los puntos resolutivos primero y segundo.

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek y Presidente Aguilar Morales, respecto de los puntos resolutivos tercero, cuarto y quinto.

El Tribunal Pleno acordó aguardar la presencia del señor Ministro Pérez Dayán para que, con su voto, se resuelva definitivamente el asunto.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales prorrogó la discusión del asunto para una siguiente sesión, por lo que deberá permanecer en lista.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el siguiente asunto de la lista:

III. 33/2017

Incidente de inejecución de sentencia 33/2017, respecto de la dictada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Mérida, Yucatán, en apoyo a las labores del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el recurso de revisión R.A. 26/2016, promovido por [REDACTED]. En el proyecto formulado por el señor Ministro Eduardo Medina Mora I. se propuso: *"PRIMERO. Es fundado el incidente de inejecución de sentencia a que este toca se refiere. SEGUNDO. Queda inmediatamente separado de su cargo [REDACTED] actual Titular de la Delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México, por haber incumplido la sentencia pronunciada en el recurso de revisión 26/2016, derivado del juicio de amparo indirecto 38/2016. TERCERO. Consígnese a [REDACTED] actual Titular de la Delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México, ante el Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México en turno, por el desacato a una sentencia de amparo de acuerdo con lo previsto en la fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución Federal, a fin de que sea juzgado y sancionado por la desobediencia cometida, en los términos previstos por el artículo 267 de la Ley de Amparo vigente. CUARTO. Para los efectos mencionados en la parte final del Considerando Tercero de esta resolución, déjese el presente*



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

incidente de inejecución de sentencia abierto y requiérase a la autoridad ahí señalada el cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los términos especificados”.

Asimismo, el secretario general de acuerdos informó que, en cumplimiento al punto tercero, párrafo segundo, del Acuerdo General 10/2013 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, se solicitó informe al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México sobre la recepción de documentación relevante presentada por las autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector, o el dictado de algún proveído en el que se tenga por cumplida la sentencia emitida en el juicio de amparo 38/2016; en respuesta, el referido órgano jurisdiccional remitió, el día de hoy a las once horas con cinco minutos —vía correo electrónico—, copia del acuerdo de uno de junio de dos mil diecisiete, dictado por la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en el que, ante la falta de desahogo de la prevención realizada en Acuerdo Plenario de cuatro de mayo pasado, ordenó remitir copia certificada de ese proveído, así como la cédula de su notificación al titular de la Unidad Departamental de Control de Gestión y Análisis de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México para que, en auxilio de las labores de ese tribunal, haga efectiva la multa de mil pesos, impuesta al titular de la Delegación Venustiano Carranza y, a su vez, previno a dicho titular para que, en el término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación de ese proveído, exhibiera ante el tribunal el nombramiento a favor de la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

actora [REDACTED] en el puesto de base de educadora.

Del mismo modo, informó que a las doce horas con quince minutos del día de hoy, se recibió escrito del apoderado legal de la Delegación Venustiano Carranza, en el que señala que, con fecha siete de junio del año en curso, su representada exhibió, mediante promoción al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, diversa documentación en copia certificada con la que se acredita el cumplimiento parcial al laudo emitido en el respectivo juicio laboral rubro citado, respecto a la reinstalación de la hoy quejosa [REDACTED], por lo que se está a la espera de que el tribunal burocrático emita el acuerdo correspondiente en el que determine ese cumplimiento parcial, y anexó copias simples y certificadas de diferentes documentos.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta de los considerandos primero y segundo relativos, respectivamente, a la competencia y a los antecedentes, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro ponente Medina Mora I. solicitó dejar en lista el asunto, con el fin de analizar las constancias con las que se dio cuenta y determinar lo conducente. Recalcó



Sesión Pública Núm. 54

Martes 13 de junio de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

que, cuando una sentencia de amparo comienza a cumplirse cuando llega a esta Suprema Corte, es clara demostración de negligencia y contumacia; no obstante, sería irresponsable plantear una determinación a pocos minutos de conocer esos documentos.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales prorrogó la discusión del asunto para una siguiente sesión, por lo que deberá permanecer en lista.

Acto continuo, levantó la sesión a las doce horas con cincuenta y nueve minutos, previa convocatoria que emitió a los integrantes del Tribunal Pleno para acudir a la próxima sesión pública ordinaria que se celebrará el jueves quince de junio del año en curso, a la hora de costumbre.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, quien da fe.

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOSPODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN